

Ofensiva legal contra los encargos de obra pública a Tragsa

ENCOMIENDA DE GESTIÓN/Las constructoras recurren los últimos encargos de Adif, obras de colegios y edificios judiciales.

C.Morán. Madrid

La falta de trabajo en España por la caída de la inversión pública ha desatado nuevamente las tensiones entre las constructoras y los grupos controlados por el Estado, que también participan en el mercado de obra pública a través de las encomiendas de gestión. En el punto de mira del sector constructor está Tragsa, la empresa de la Sepi especializada en trabajos en el medio rural y urgencias medioambientales que, en los últimos meses, ha recibido varios encargos de empresas y de Administraciones públicas sin pasar por el filtro del sistema de contratación pública.

“Representa, desde nuestro punto de vista, competencia desleal, ya que estos encargos, por muy medio propio de la Administración que sea, no están justificados ni por urgencia ni por el propio objeto social de Tragsa”, indican desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Los servicios jurídicos de la patronal del sector han decidido tomar cartas en el asunto y han llevado los encargos más sospechosos a los tribunales de lo contencioso-administrativo.

En concreto, la CNC ha presentado una demanda an-

EQUILIBRIO

El grupo público, que el año pasado elevó la facturación a **701 millones** con algo más de 11.500 trabajadores (más de la mitad de la plantilla es fija), prevé alcanzar en 2018 el ‘break even’, pero “el objetivo de Tragsa no es ganar dinero”, dicen.

te los juzgados de centrales de lo contencioso administrativo contra una encomienda de Adif para construir un túnel peatonal que conecta las estaciones de cercanías de Sol y de Gran Vía en Madrid. Se trata de una obra de 3,1 millones de presupuesto. La patronal también ha recurrido el trabajo encargado por la Comunidad de Madrid para la construcción de un colegio en Arroyomolinos, un proyecto de algo más de 6 millones.

El grupo ampliará capital para que Diputaciones y Cabildos puedan encomendar obras

Entre los trabajos polémicos con más presupuesto sobresalen las obras de reforma de la actual sede del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. La Generalitat también recurrió a la encomienda de gestión a Tragsa para realizar esta obra, que tiene un presupuesto de unos 25 millones.

“Son encargos que no se justifican ni por razones de eficiencia ni de urgencia”, argumentan desde CNC, que cree, además, que las Administraciones pierden dinero, ya que las tarifas de Tragsa son más elevadas que los precios que obtiene la Administración en concurso público gracias a bajadas por encima del 20%. Desde Tragsa niegan la mayor. “No somos más caros que otras constructoras”, advierten desde la compañía, que dispone de estudios como el del colegio de aparejadores donde se aprecia que las tarifas son un 6,8% más bajas que los presupuestos de licitación.

El pulso de las constructoras con Tragsa viene de lejos. En 2015, también fueron muy polémicas las obras de remodelación de la sede del Ministerio de Economía (22 millones de euros) o la construcción de los Paradores de Muxía (Galicia) y Molina de



Trabajadores de Tragsa realizando obras en el medio rural.

Aragón (Castilla-La Mancha), con un presupuesto conjunto próximo a los 60 millones de euros.

El grupo público presidido por Jesús Casas rechaza las críticas del sector, ya que “todas las encomiendas están justificadas”. Respecto a los casos judicializados por la CNC, detalla que las obras de Adif se encomendaron “por razones de seguridad”, mientras que el colegio de Arroyomolinos fue una obra a la que el anterior contratista renunció. En el caso del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, la encomienda está justificada “porque el concurso público quedó desierto”.

Defensa

La empresa pública no quiere entrar en polémicas con los contratistas privados, pero señalan que “no se pueden juzgar las encomiendas sin conocer los detalles”. Recuerda,

Tragsa ha terminado obras abandonadas por contratistas por valor de 340 millones

por ejemplo, que Tragsa ha tenido que realizar el trabajo de contratistas que abandonaron la obra a medio terminar. “Lo que las patronales no comentan es que, en los últimos ocho años, Tragsa ha tenido que hacerse cargo de renuncias de contratistas por valor de 340 millones”. En esta lista negra de proyectos abandonados figuran algunos contratos que Adif adjudicó con bajadas muy agresivas, donde los adjudicatarios no disponían de medios técnicos y económicos para ejecutarlos.

A pesar de contradecir a las constructoras, desde Tragsa reconocen que es necesario

revisar su objeto social, para evitar que algunas Administraciones públicas caigan en la tentación de abusar de la encomienda de gestión: “Estamos revisando los conceptos de urgencia y emergencia” para evitar que se convierta en un cajón de sastre para algunas Administraciones.

Al ser un medio propio de la Administración, los organismos estatales como las Administraciones territoriales que forman parte de su accionariado pueden recurrir a la encomienda de gestión siempre y cuando esté justificado: “Para considerarnos medio propio es suficiente con tener una sola acción”. Según fuentes de la empresa de la Sepi, se está trabajando en ampliar el capital de la sociedad para que también puedan encomendar obras y servicios Diputaciones y Cabildos.

La Llave / Página 2

Meridia compra un solar a Värde y prevé invertir 55 millones en el 22@ de Barcelona

Marisa Anglés. Barcelona

Meridia Capital sigue tomando posiciones en el distrito 22@ de Barcelona y esta vez ha apostado por la zona norte del barrio, la que está recibiendo una mayor inversión por parte del Ayuntamiento y donde los precios de los solares todavía no se han disparado. El fondo liderado por Javier Faus ha pagado 25 millones de euros por un terreno con una edificabilidad de cerca de 25.000 metros cuadrados calificada como terciaria. El solar pertenecía al fondo de capital riesgo Värde Partners. Fuentes cercanas a la ope-

ración indicaron que la intención de Faus es levantar dos edificios de oficinas en el solar, que está delimitado por las calles Pere IV y Fluvíà.

Las mismas fuentes indican que la decisión de Värde Partners de desinvertir en este solar está relacionada con la importante compra que el fondo realizó el año pasado en este distrito, cuando adquirió

Faus construirá dos edificios de oficinas en el 22@ que sumarán 25.000 metros cuadrados

un terreno con una edificabilidad de 52.000 metros cuadrados por 50 millones.

El proyecto de Faus para este solar contempla destinar uno de los edificios a una sede corporativa y convertir el otro en un edificio multiinquilino. La construcción de los dos inmuebles supondrá una inversión de unos 30 millones de euros, lo que eleva la inversión total hasta los 55 millones de euros.

Meridia III

La operación se ha realizado a través del vehículo Meridia III, que nació con unos fon-

dos propios de 220 millones de euros y lleva invertidos (o comprometidos en proyectos como el del 22@) cerca de 500 millones de euros gracias al apalancamiento bancario.

Esta operación se suma a otro proyecto de gran envergadura que Meridia ya tiene en marcha en el 22@. Se trata de un terreno que adquirió hace poco más de un año y que cuenta con una edificabilidad de 43.000 metros cuadrados. El mayor edificio de este complejo se destinará a oficinas y ya está prealquilado a Everis. El resto será para viviendas.

Tubacex: 30 millones para la planta de EEUU

Marián Fuentes. Bilbao

La tubera alavesa Tubacex avanza en la puesta en marcha de su segunda planta en Estados Unidos, que se ubicará en Oklahoma y para la que ha logrado un préstamo de Cofides de 30 millones de euros. La nueva instalación permitirá al grupo reforzar su diversificación hacia el negocio aeroespacial con tubos para clientes como ITP, Rolls y Boeing, en un mercado con gran proyección de crecimiento, según el consejero delegado, Jesús Esmoris.

Tubacex tiene presencia productiva en EEUU desde

hace 20 años con una factoría en Pensilvania, que le ha permitido suavizar el impacto de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, que están afectando a otras compañías metalúrgicas europeas.

Tubacex proyecta invertir 26 millones en tres años en la nueva fábrica, con la convicción de que su cuota en ese país crecerá dado que EEUU no cuenta con ninguna planta de tubos inoxidables. Actualmente, además de su centro en Pensilvania, la tubera tiene oficinas comerciales y un almacén en Houston.